



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Informe firma conjunta

Número:

Referencia: EX-2024-64068739- -APN-SGAI#TFN – RINCI DANIEL FERNANDO s/ AMPARO-SENTENCIA (VOCX)

En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2024-64068739- -APN-SGAI#TFN, caratulado “RINCI DANIEL FERNANDO s/ Recurso de Amparo”

La Dra. Gómez dijo:

I.- Mediante RE-2024-64064213-APN-SGAI#TFN, el Dr. Daniel Fernando Rinci interpone recurso de amparo por mora en los términos del artículo 182 y subsiguientes de la ley 11.683 (t.o. vigente) contra la AFIP-DGI a fin de que dicha administración se expida respecto a la apelación presentada en fecha 7 de febrero de 2023, Presentación Digital N° 202300137752 realizada en el marco del artículo 74 del Decreto N° 1397/79, reglamentario de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones, contra la notificación electrónica concretada el 16 de diciembre de 2022.

En tal sentido, destaca que con fecha 6 de diciembre de 2023, presentó pronto despacho ante la AFIP mediante Presentación Digital, sin que haya habido pronunciamiento alguno al día de la fecha más que aducir que dicha presentación fue agregada al expediente digital EX-2023- 00273316-AFIP-SEREAGM011#SDGOPIM.

Relata que mediante planes de pagos generados antes de la vigencia de la ley 27.653, abonó el total de las obligaciones sustantivas correspondientes a Impuesto a las Ganancias, Período Fiscal 2019 e Impuesto Sobre los Bienes Personales, períodos fiscales 2019 y 2020. Señala que luego de consultar al servicio web “Sistema de Cuentas Tributarias”, observó que seguían figurando como deudas los intereses resarcitorios correspondientes a las declaraciones y anticipos de Ganancias 2019 y Bienes Personales 2019 y 2020, sin perjuicio de haberse cumplido la causal prevista en la Ley 27.653 en el art. 6 del inciso e, por haberse cancelado la totalidad del capital de dichas obligaciones; por ello mediante Presentación Digital #202200141644 de fecha 9 de febrero de 2022, solicitó que se corrigiera la cuenta corriente fiscal conforme lo establecido en el marco de la citada ley.

Expone que en la comunicación de descargo del mismo día, se le informó: “los intereses que figuraban en

incumplimientos están condonados de oficio según lo que establece la Ley N° 27653 en el artículo 6 (...) Por favor verificar en el Sistema de Cuentas Tributarias/Consulta/Consulta de deuda consolidada/Incumplimientos completos”. Luego, dice haber efectuado el 9 de noviembre de 2022 la Presentación Digital #202201407409, precisando que habiendo consultando nuevamente “Incumplimientos Completos”, figuraba reclamada toda la deuda supuestamente condonada. Ante ello y siempre según el amparista, el Fisco respondió que en caso de no haber cumplido los requisitos del régimen los intereses no estarían condonados, haciendo especial mención a las Declaraciones Juradas informativas previstas en los artículos 59 y 48 de las Resoluciones Generales 4816/2020 y 5101/2021, respectivamente.

Posteriormente, el amparista invoca la Presentación Digital #202201551427 del 14 de diciembre de 2022, por la que señala haber aclarado específicamente que el deber de presentar las referidas Declaraciones Juradas no le comprendía por cuanto no había realizado repatriación alguna de fondos con motivo de la moratoria fiscal; frente a tal presentación, el Fisco contestó que había incumplido el régimen informativo dispuesto por el artículo 59 de la RG N° 4816, por lo que no procedía la condonación peticionada.

Finalmente, indica que en fecha 7 de febrero de 2023 mediante Presentación Digital #202300137752 presentó el Recurso del artículo 74 del Decreto N° 1397/79, cuya mora en la respuesta motiva. En efecto, el amparista puntualiza que la falta de respuesta por parte del organismo recaudador limita su accionar, al verse obstruido de contar con una resolución administrativa –tanto a favor como en contra- que le permita continuar impulsando su reclamo, lo que afecta derechos el debido proceso, derecho de propiedad y derecho de peticionar ante las autoridades.

El amparista acompaña prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita se adopten las medidas necesarias para el dictado de la resolución relativa al recurso interpuesto, en virtud del artículo 74 del Decreto N° 1397/79.

II.- Que mediante IF-2024-68997613-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional produce el informe solicitado, afirmando que con fecha 07/02/2023 el contribuyente interpuso ante la Agencia 2 N°11 de la AFIP-DGI, Reclamo Administrativo de apelación en los términos del art. 74 del Decreto N° 1397/79, reglamentario de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones. Explica que la resolución del reclamo interpuesto no es automática, toda vez que para hacer efectiva la misma se deben analizar distintas cuestiones.

Solicita en primer lugar que la acción deducida se declare inadmisibile, toda vez que la situación planteada por el recurrente no reúne los requisitos substanciales establecidos por el art. 182 de la ley 11.683 para su procedencia. Sostiene que no se configura en el caso una demora excesiva en resolver el reclamo de la actora, ni mucho menos, imputable a los empleados, ya que se ha dado debida intervención a las áreas competentes encargadas de llevar adelante la verificación del beneficio reclamado, siendo ello un trámite extremadamente complejo.

Señala que la Sección Determinación de Oficio (DIRPA), informó con fecha 28/06/2024 que... *“el caso se encuentra en proceso de análisis por el área competente..”* por lo que afirma que no existe demora y en consecuencia el recurso de amparo interpuesto no resulta procedente y solicita que así sea declarado, con expresa imposición de costas al presentante.

Acompaña actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y peticiona que oportunamente, se dicte sentencia rechazando el recurso de amparo interpuesto en autos, con costas.

III.- Que mediante PV-2024-70557236-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “D”.

IV.- Que, en primer lugar, corresponde señalar que para la procedencia del recurso de amparo deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: 1) Demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) Debe provocar un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho. A ello se suma que desde el dictado de la Ley N° 25795 a los requisitos indicados, cabe añadir la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa, debiendo haber transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiese resuelto su trámite, circunstancia que se encuentra cumplida en autos.

Que conforme sostuviera la Sala “B” de este Tribunal, al sentenciar la causa "Casale S.A.I C. s/amparo" de fecha 13 de febrero de 2001, "...en razón de ser obligación del organismo fiscal resolver las cuestiones que se someten a su consideración, ya sea dentro de los plazos fijados por la ley o en un tiempo prudencial, contando para ello con amplias facultades según la ley procesal, a fin de evitar causar un perjuicio al contribuyente...".

"Que en consecuencia, no puede sostenerse ya la exigencia de un cuarto requisito referido a la inexistencia de otra vía procesal para el planteamiento del amparo de la Ley N° 11.683, no sólo por cuanto ello implicará aumentar la demora señalada, sino fundamentalmente porque conforme a lo sostenido por la Alzada, las distintas vías previstas por la ley procesal a favor del contribuyente, no implican la exclusión de la acción de amparo, ya que la finalidad perseguida por dicho instituto es la de permitir la obtención de un pronunciamiento expreso del órgano administrativo demandado" (C.N.C.A.Fed., Sala IV, "Estexa S.A." del 22/3/89 y Sala I in re “Frigorífico Gorina S.A.” del 9/12/99).

Por otra parte, el perjuicio real o potencial al normal desenvolvimiento de un derecho, debe provenir de una conducta administrativa arbitraria o ilegítima que sea capaz de sustentar el recurso impetrado, encuadrando en tal concepto las demoras excesivas o injustificadas y aquellos casos donde, existiendo un trámite pendiente de realización por parte de los empleados administrativos de la Dirección General Impositiva, haya transcurrido un plazo que excediera lo razonable y el particular pretenda una resolución expresa del ente recaudador (conf. Sala “A”, in re "Suarko S.R.L.", de fecha 28/10/97).

Que conforme a los antecedentes del caso que se reseñan en los Considerandos I y II del voto de la Vocal Instructora, si bien el recurso previsto en el art. 74 del decreto 1397/79 constituye un procedimiento reglado que prevé su propio *iter* recursivo para que la pretensión de la recurrente resulte satisfecha, incluso ante el silencio de la administración, cabe agregar que "...los remedios que la legislación prevé frente a la demora de la Administración se hallan establecidos a favor de los particulares afectados por dicha inactividad. Consiguientemente, corresponde a éstos elegir el que consideran más adecuado para la eficaz tutela de sus derechos, siempre que se encuentre configurada la situación de morosidad requerida por la ley para su procedencia" (conf. Criterio CNACAF Sala II, al resolver con fecha 8 de setiembre de 1992 los autos "Neumáticos Good Year S.A."). Así la Alzada ha sostenido que, la finalidad del recurso de amparo por mora es obtener un pronunciamiento expreso de la administración ante una petición formulada y, por ende, el incumplimiento a dicho deber de acción constituye una conducta irregular que habilita su viabilidad, entre otros remedios, ya que resulta facultativo de los particulares optar por la vía que consideren más beneficiosa a sus intereses (conf. Sala III, en la causa “Hacienda San Miguel SA”, pronunciamiento del 2 de febrero de 2017 y Sala I, en autos “Banco de Valores SA”, sentencia de fecha 2 de mayo de 2019). A mayor abundamiento, cabe señalar que he tenido la oportunidad que admitir la vía escogida al adherir al voto del Dr. Brodsky al resolver la causa “Antártida Cía. Argentina de Seguros S.A.I.C. s/ recurso de amparo”, con fecha 24 de agosto de 2012 y más recientemente al decidir la causa “Educar para compartir Asociación Civil s/recurso de amparo”, sentencia del 2 de febrero de 2023.

V – Que a tenor de lo expresado ut supra, corresponde analizar si en el caso concreto, ha existido una demora excesiva en expedirse respecto del trámite solicitado y, en tal caso, si dicha demora es imputable al organismo fiscal.

Que no puede soslayarse que el Fisco Nacional al responder el informe que se le requiriera en los términos del art. 183 de la ley de rito, se limitó a acompañar las actuaciones administrativas (IF-2024-68985976-APN-DTD#JGM), donde dice dar cuenta de los distintos trámites que estaría llevando a cabo al dependencia fiscal correspondiente, respecto del recurso de apelación art.74 Decreto 1397/79, presentado por la amparista con fecha 07/02/2023, con relación a la condonación de los intereses resarcitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27.653, de conformidad con lo normado en el artículo 6, inciso “e”, de dicha norma.

Que no puede obviarse que de las constancias allegadas por el ente fiscal en los presentes autos, se observan las presentaciones realizadas por la amparista y distintos acuse de recibo de las mismas, entre otros. Que teniendo en consideración la fecha en que fuera presentado el recurso de apelación del art.74 Decreto 1397/79 y la escasa actividad desplegada por el ente Fiscal a lo largo de casi un año y medio tal como se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, solo cabe concluir que se verifica por parte del organismo recaudador una demora excesiva para expedirse respecto de lo solicitado.

Que habiéndose admitido la procedencia del recurso bajo estudio, vale recordar que el amparo establecido por la ley N° 11.683 (t.o. vigente) ha sido instituido para proteger los derechos o intereses de los administrados que se vieran obstaculizados por la demora excesiva en que incurra el Fisco Nacional en la realización de un trámite, es decir que se trata de un remedio frente a la pasividad de la administración en el marco de un expediente administrativo o petición concreta, con el perjuicio que le origina al administrado la falta de respuesta.

Que como se ha mencionado más arriba el Fisco Nacional no ha aportado elemento probatorio fehaciente que fundamente sus dichos en cuanto a que su representada, en la actualidad, se encuentra dando trámite al recurso de apelación deducido por la amparista en los términos del art. 74 de la ley de rito fiscal.

Que al respecto, debe destacarse que la acción de amparo prevista en la ley N° 11683 (t.o. 1998 y modif.), persigue la realización de las diligencias o trámites administrativos requeridos a la AFIP, quedando excluida de su ámbito toda posibilidad de obtener una decisión que obligara a la Administración a resolver de una manera determinada (conf. CSJN, fallo del 27/12/1990, “Comatter S.A. s/amparo - IVA - Recurso de Hecho”).

Que, a tenor de lo expresado cabe concluir que en el presente caso le asiste razón a la amparista en cuanto a la existencia de una demora por parte del ente recaudador, y en consecuencia corresponde hacer lugar al recurso de amparo interpuesto fijándose un plazo de veinte (20) días para que el Fisco Nacional complete las diligencias para la conclusión del trámite a su cargo.

Las costas se imponen al Fisco Nacional atento haber éste incurrido en una demora en realizar un trámite o diligencia a su cargo, con la consecuente incertidumbre para la contribuyente respecto del reclamo impetrado.

La Dra. O'Donnell dijo:

Tal como sostuviera al fallar en “Educar para compartir Asociación Civil s/recurso de amparo”, del 2 de febrero de 2023, en atención al criterio adoptado por la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal en “*Banco de Valores S.A.*”, sentencia de la Sala I del 2 de mayo de 2019, “*Lob Martín Alejandro*”, de la Sala II, del 3 de mayo de 2019, “*Hacienda San Miguel S.A.*”, de la Sala III del 2 de febrero de 2017 y “*Massa Roberto Luis*”, de la Sala

V del 5 de septiembre de 2017, entre otros, por razones de economía procesal, corresponde resolver el presente recurso, sin perjuicio de considerar que cuando el art. 182 de la ley 11.683 se refiere a *trámite o diligencia a cargo de empleados administrativos* no comprende a la sustanciación del recurso de apelación previsto en el art. 74 del decreto 1397/79, reglamentario de dicha norma, que posee un procedimiento propio, con mecanismos también propios para instar la decisión administrativa.

Siendo así, en atención a las constancias de la causa expuestas en el voto de la Vocal Instructora que dan cuenta de la existencia de una demora excesiva en la resolución del trámite iniciado por el Sr. Daniel Fernando Rinci), adhiero a la solución propiciada en el mismo.

El Dr. Martín dijo:

I. Que en las presentes actuaciones el amparista reclama la conclusión por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de un trámite consistente en la interposición de un recurso de apelación iniciado en el marco del Decreto 1397/79 con fecha 07 de febrero de 2023.

II. Que en su presentación, más allá de un relato cronológico que involucra planteos y respuestas en torno del tema de fondo, no acreditó ni enunció lesión concreta motivada por el silencio del Fisco Nacional y sin perjuicio de hallarse vencidos los plazos fijados, tampoco alegó las razones que avalarían la perentoriedad en la resolución del asunto involucrado. Por ello considero que de las manifestaciones de los funcionarios que produjeron los distintos informes, que componen la respuesta dada al traslado otorgado en el marco del artículo 182 de la Ley de Procedimiento Fiscal, se destaca la aseveración de que la presentación original se encuentra en trámite, al cual calificaron de “complejo”. Esto último a mi entender implica la asunción de una responsabilidad y un compromiso al asegurar que el mismo se encuentra en proceso, por ende, no detenido ni demorado. Prudentemente estimo que la fijación de un plazo perentorio para finalizar el trámite, puede vulnerar la profundidad, trascendencia y eficiencia del análisis que le corresponde al Organismo Fiscal.

III. Que al mismo tiempo no puede pasarse por alto las razones que rodean la existencia del instituto del amparo por mora receptado en la Ley de rito. Su aplicación está vinculada con necesidades urgentes o impostergables por parte de los contribuyentes y/o responsables que no encuentran una respuesta adecuada pero fundamentalmente oportuna y frente a ello el Tribunal Fiscal dispone de una herramienta amplia para eventualmente ordenar al Fisco Nacional a que finalice una tramitación en un plazo razonable. Sin embargo, ello no es el resultado de una aplicación automática, pues el primer aspecto a evaluar es la presencia de premura y apremio en los intereses de los presentantes, y a renglón seguido se impone examinar que ello se encuentre concatenado y vinculado con la afectación de un derecho definido, ya que la inexistencia de este último eslabón quitaría razón de ser a la urgencia y por ende a la presencia de una premisa válida en la figura del amparo por mora.

IV. Que en consecuencia no habiéndose acreditado una demora arbitraria asociada a una lesión ni la afectación de un derecho preciso, voto por rechazar el recurso interpuesto, con costas por su orden, atento el equilibrio argumental que lucen las actuaciones.

Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto fijándose un plazo de veinte (20) días para que el Fisco Nacional complete las diligencias para la conclusión del trámite a su cargo. Las costas se imponen al Fisco Nacional.

2º) Regular los honorarios del Dr. Rinci Daniel Fernando por su actuación en autos en el doble carácter de

apoderado y patrocinante en la suma \$ 105.020 (pesos ciento cinco mil veinte) equivalente a 2 UMA,y por el patrocinio letrado la suma de \$ 262.550 (pesos doscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta) equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44, inc. b), último párrafo de la ley 27.423 y la Resolución SGA N° 1497/2024 de fecha 6/6/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.

Regístrese y notifíquese.